

## ALGUNOS ASPECTOS TEÓRICOS-CONCEPTUALES DE LA REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL PREVENTIVO PARA COMPAÑÍAS MERCANTILES EN ECUADOR

*Lissangee Mendoza García*

*Rubén Méndez Reátegui*

### 1. Introducción

El COVID-19 ha ocasionado crisis a nivel mundial con un incremento exponencial de contagios y un índice preocupante de mortalidad. Frente a este escenario y de manera generalizada, los países han decidido declarar la emergencia sanitaria con estrictas medidas de seguridad y, como consecuencia de la afectación económica, medidas extraordinarias enfocadas para mantener a flote a sus agentes económicos. En ese sentido, es primordial considerar la situación particular por la cual están atravesando las “compañías” que desarrollan actividades en los distintos sectores de la economía nacional, puesto que, el escenario de crisis global no implica que estas puedan dejar de cumplir obligaciones con quienes mantengan un vínculo jurídico-económico y/o patrimonial (*stakeholders*).<sup>27</sup>

---

27 Este capítulo se inserta dentro del marco de actividades del grupo de investigación GIDE Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Proyecto 4 Mejora Regulatoria). Por solicitud expresa de la autora del Capítulo y al amparo del Art. 118 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, se mantiene el formato original del documento.

Lo expuesto conlleva la necesidad de implementar mecanismos que, “orienten” a las compañías para que éstas puedan ingresar, mantenerse y salir de forma ordenada del mercado. Estos lineamientos de conducta involucran distintos grados de intervención del estado (directa y/o indirecta) motivo por el cual se les caracteriza como “regulaciones”. Al ser *instrumentos para el mercado* deben procurar ser dinámicas, es decir, capaces de adaptarse a la realidad del entorno económico que atraviesen los agentes, en un contexto de crisis económica, y que requieran reestructurar su patrimonio y mantenerse activos, reconvertirse y/o salir sin generar efectos perversos que afecten el funcionamiento del sistema. Es decir, estos *instrumentos para el mercado* afrontan el reto de emular *instrumentos de mercado* al permitir que los agentes económicos reduzcan los costos administrativos y de transacción connaturales a participar de un contexto de intercambio dinámico de derechos de propiedad. (Méndez Reátegui, 2017 y 2019)

Aunque Ecuador cuenta con una Ley de Concurso Preventivo (vigente) y otras normas relacionadas al *procedimiento concursal*, es necesario abandonar la idea que equipara tener una norma legal con un escenario de Calidad Institucional. Por el contrario, una coexistencia no armonizada de instrumentos legales debe dar lugar a la revisión del marco institucional y eso -potencialmente- a la unificación de las reglas de juego. Por lo tanto, reglas necesarias para un entorno económico ‘sano’ como aquellas que rigen los

procedimientos concursales preventivos deben reflejar un cambio en el paradigma y permitir la integración del marco institucional (*institutional framework*) y su adaptación flexible a los vaivenes de un contexto económico y social en permanente cambio y evolución.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que Ecuador se encuentra en el puesto 170 de 180 países según el Índice de Libertad Económica (The Heritage Foundation, 2019), lo cual lo coloca en la categoría de los países con economía reprimida, que obliga a repensar también aspectos como la *competitividad institucional* (en la que el país debe enfocarse con urgencia), especialmente la que establece las bases para que las compañías puedan utilizar eficientemente su patrimonio y los mecanismos para corregir asignaciones sub-óptimas de capital.

En base a lo señalado, este capítulo propone un estudio descriptivo del concurso preventivo referente a compañías mercantiles en la normativa nacional. Con esa finalidad recurre a la comparación legal y a un marco teórico-conceptual cercano a la Nueva Economía Institucional y al Análisis Económico del Derecho (AED). Cabe advertir que, al tener un carácter preliminar, este capítulo priorizará el estudio de los *beneficios* que puede conllevar el establecimiento de un modelo jurídico eficiente, con mejoras en un sentido de Pareto, o, dicho de otra forma, que

permita a las compañías mercantiles y sus *stakeholders* acercarse a un contexto *win-win* (ganar-ganar). Esto supone la ‘máxima eliminación posible’ de costos transaccionales cuyo origen primigenio pueda deberse a defectos en el diseño de un marco institucional disperso y todavía carente de suficiente armonía y coordinación. (Méndez Reátegui, 2017)

## 2. AED y Derecho Concursal Preventivo

Es necesario tener presente ciertos conceptos elementales para una comprensión del procedimiento concursal preventivo desde el AED. En primer lugar, debemos considerar la existencia de “instituciones” que pueden definirse como “reglas de juego en una sociedad o, más formalmente, las restricciones ideadas humanamente que dan forma a la interacción humana” (North, 1990), en tal sentido, la Ley del Sistema Concursal se corresponde a un componente integrante del marco institucional del concurso preventivo que engloba al conjunto de las leyes promulgadas recientemente: a) Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación; y b) Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del Covid-19.

Como todo marco institucional que busque coadyuvar el crecimiento y desarrollo económico y social de un país, se requiere además cumplir con algunos parámetros que le brinden *fortaleza*

*institucional*. Esta a su vez se conceptualizará por las dimensiones de imposición y estabilidad:

La imposición es el grado en que las reglas de papel son cumplidas en la práctica. Donde todos los actores relevantes en un territorio dado cumplen rutinariamente con las reglas de papel o enfrentan un alto riesgo de castigo, la imposición es alta.

Por estabilidad queremos decir durabilidad. Las instituciones son estables en la medida en que sobreviven no sólo al paso del tiempo sino también a cambios en las condiciones –esto es, distribuciones de poder y preferencias subyacentes– bajo las cuales inicialmente se crearon y reprodujeron. (Levitsky y Murillo, 2010, p. 34)

Esta aproximación teórica es también descrita por Levitsky y Murillo (2010, p. 34) a través del Gráfico 1:

**Gráfico 1:** Dos dimensiones de la fortaleza institucional

		IMPOSICIÓN	
		ALTA	BAJA
Estabilidad	Alta	Instituciones formales fuertes	Instituciones formales estables (pero débilmente impuestas)
	Baja	Instituciones formales inestables (pero efectivamente impuestas)	Instituciones formales débiles

**Fuente:** Levitsky y Murillo

Por lo tanto, el marco institucional debe establecerse con *alta estabilidad y mecanismos de imposición efectivos y eficaces* (instituciones fuertes). Lo señalado, cobra mayor relevancia si el objetivo requiere que sean considerados factores como el dinamismo del Derecho frente a cambios en la sociedad civil. Implicará entonces que las normas concursales preventivas deban adaptarse a la realidad empresarial del país y pensar en una propuesta que tenga presente el rol de los coordinadores institucionales del sistema (entidades gubernamentales y colaboradores/aliados dentro de la sociedad civil).

Para esto, la implementación de mecanismos vigorosos de procedimiento concursal preventivo requiere de un marco de reglas eficientes que deben establecerse siendo conscientes del rol que cumplen dentro del país: “conjunto de instituciones predecibles (permiten hacer frente a la incertidumbre), flexibles (que se adaptan a las fricciones del tiempo y cambios dentro del tejido social) y coordinadas (son adoptadas en concordancia con el sistema de creencias)”. (Méndez y Alosilla, 2015, p. 10). Así mismo, el fortalecimiento institucional del procedimiento concursal preventivo demanda determinar la viabilidad a largo plazo, observando siempre los objetivos que sean establecidos y eliminando el ‘exceso’ de barreras de entrada, salida y permanencia al mercado, puesto que:

Recordemos que un Estado moderno y eficaz requiere también respetar la observancia del principio de racionalidad. Este alude a que las actuaciones administrativas deben ir de acuerdo con la realidad que se presenta dentro de una determinada sociedad. Además, debe tener en cuenta otras leyes aplicables al caso, con el fin de no establecer contradicciones. (Rodríguez, 2008, citado por Suárez Jácome y Méndez Reátegui, 2020)

## **2.1. La empresa como institución económica**

Además, instituciones económicas como la empresa que debe entenderse como el nudo contractual que se dota de una estructura u organización y que tiene naturaleza patrimonial y pecuniaria, de la cual Francisco Marcos (2015) resume en sus principales elementos:

El contrato de sociedad facilita la producción y la acumulación del capital como recurso especializado aportado por los inversores (i.e., los socios), delegando la gestión en un órgano de administración separado, pero su principal nota distintiva radica seguramente en su carácter de «contrato personificado». A través del contrato de sociedad, por virtud de lo previsto en la Ley, se crea una persona jurídica independiente, distinta de los socios, que tiene su patrimonio y que asume sus propias obligaciones. De este modo, los trabajadores, los clientes de la sociedad y otros terceros traban sus relaciones con ella y no con los socios. (p. 32)

En ese sentido, las compañías tienen un fin social y económico, que, en palabras de John Kay (citado por Argandoña, 2015), establece que:

El objetivo de la empresa es producir bienes y servicios para satisfacer necesidades económicas y sociales, para crear un empleo satisfactorio y remuneratorio, para obtener rendimientos para sus accionistas y otros inversores, y para hacer una contribución positiva al entorno social y físico en el que opera.

## **2.2. Riesgos y posibles alternativas**

El fin social y económico de una empresa pueden verse amenazados por ciertos riesgos, que se presentan como la probabilidad de falla o fracaso en toda actividad o transacción de negocio o proceso productivo. Es así como no solo esperamos el valor del riesgo, sino la magnitud absoluta del mismo. (Zúñiga, 2002) Por lo cual, es estrictamente necesario tener un “salvavidas” en caso de que la empresa esté en crisis económica, puesto que si se obtiene un mecanismo eficaz que promueva a la compañía a salir de dicha situación, la magnitud del riesgo podría bajar considerablemente.

Sin embargo, el manejo inadecuado del patrimonio de la empresa o, como sucede en la actualidad por la crisis sanitaria por el COVID-19, que involucra un condicionamiento externo que



afecta al desempeño de las actividades económicas empresariales y, por ende, a la actividad comercial y/o productiva, y como hemos sostenido, la coloca en una situación compleja para cubrir las obligaciones que se tienen con las personas que de forma directa o indirecta tienen relación con la empresa.

Esta afectación, que en un supuesto tenga gravedad alta o coloque a la empresa en una posición riesgosa, supone varias alternativas que pueden reducirse a dos: socios/accionistas deciden lo más conveniente, y una de estas es la *salida del mercado de la compañía*, ya que los pasivos superan (en el porcentaje o valor determinado por la normativa) a los activos; o, decidir que se pretende continuar con la existencia de la empresa y *permanecer en el mercado*, por ende, se necesitan mecanismos eficaces para subsanar los pasivos que provocan esta crisis y determinar medidas financieras que a futuro permita estabilidad económica.

Estas dos opciones pueden abrir la posibilidad de acogerse al *procedimiento concursal preventivo*, puesto que la misma compañía al determinar las dificultades en la rentabilidad puede solicitar empezar con dicho concurso. Cabe mencionar que, un plan de reorganización puede llegarse a obtener mediante el *sistema concursal preventivo*.

### **2.2.1. ¿Salir del mercado o permanecer en él?**

Inicialmente, al considerar que la empresa debería permanecer en el mercado, se podría iniciar una alternativa jurídica que permitiría una reestructuración financiera, y en tal caso, la compañía siendo la parte deudora, inicia una solicitud de procedimiento concursal preventivo para determinar el plan ideal de reingeniería jurídica y económica.

Sin embargo, si se decide la salida del mercado, la compañía también podría aplicar al procedimiento concursal preventivo para acordar un plan de pagos con aquellos que posee obligaciones pendientes para acelerar el proceso de disolución, liquidación y, por último, la cancelación de la compañía.

En cuanto a la salida del mercado, debemos considerar el sentido económico de crisis y referirnos a la quiebra, que supone una opción de terminación económica principalmente y después la terminación jurídica de una actividad empresarial, esta podría ser el resultado de un concurso preventivo, puesto que, aunque su objetivo es la reorganización empresarial para mantenerse en el mercado también “a reorganization plan must be adopted which settles the claims of all pre-bankruptcy creditors”. (White, 1989, p. 138)

Sin embargo, la decisión de los socios o accionistas respecto al futuro de la empresa puede estar limitada por ciertas barreras, puesto que existen Barreras Legales, que según Tarziján y Paredes (2012) son: “Las barreras legales tienen su origen en la normativa y corresponden a aquellas con las cuales, por algún cuerpo legal, se impide, o al menos se encarece, la entrada de nuevas empresas en una industria”. (p. 83)

En tal sentido, existen barreras no solo en cuanto a la entrada al mercado, sino también barreras legales relacionadas a la permanencia y salida del mercado. Estas barreras suponen costos, tales como los costos de permanencia o aquellos en los que empresas incurren para evitar los costos de salida del mercado, estos comprenden varios costos de transacción, como los valores legales (abogados), contadores, de agencia, costos de negociaciones, trámites en instituciones, entre otros.

Los costos de permanencia pueden ejemplificarse también a través de las barreras de permanencia en el mercado. En lo que nos ocupa, estas serán entendidas como los obstáculos que impiden que la compañía se mantenga en el mercado por el alto grado de sacrificio que esto supone.

En cuanto a los costos de salida, son aquellos valores que asume la empresa, producto de abandonar el mercado, tales como costes de cancelación en contratos con proveedores, indemnizaciones

que hay que abonar a los empleados, pagos de impuestos, costos legales, en general, de las obligaciones que el agente asume para irse del mercado.

Estos suponen también barreras de salida, las cuales serán entendidas a partir de la definición de Sánchez (2015): “Las barreras de salida son los factores que impiden o dificultan que una empresa abandone una industria.” Estos factores se considerarían como amenazas en el mercado cuando sean elevados. Según OBS Business School (2017) ciertos mecanismos, como los normativos, colocan altos costos de abandono/salida que pueden obligar a las empresas a permanecer cuando ya no tienen rentabilidad.

### **2.2.2. El sistema concursal preventivo**

Bisbal Méndez y Bullard González (1996 y 1997 respectivamente, citados por Merma Molina, 2012) sostienen que el sistema concursal es un mecanismo para tratar las crisis de las empresas pues reduce los costos de transacción entre los acreedores y así decidan sobre el mejor destino de la empresa, que puede complementarse al considerar que, el propósito del procedimiento concursal preventivo es hacer que el deudor y su gran número de acreedores se sienten en la misma mesa, pensando que las partes han llegado a un acuerdo justo, por lo tanto, el deudor evita ser demandado y así exponerlo a la quiebra. (Aguilera, 2020)

En base a lo dicho anteriormente, podríamos definir al Derecho Concursal Preventivo como aquella rama del Derecho que propone una solución jurídica para aquellas sociedades que atraviesan dificultades económicas y necesiten saldar responder a sus acreedores. Esta solución solicitada por el deudor promueve acuerdos con sus acreedores, con el objetivo de que ellos desistan a su derecho de demandar la quiebra de la sociedad y que ésta misma pueda superar sus pasivos.

Cabe señalar que, Goldenberg (2016) coincide a lo anteriormente señalado, pues hace referencia al Derecho Concursal: “(...) cuya principal finalidad es ofrecer una estructura para la negociación entre las partes para ajustar el destino del deudor (y de sus bienes) hacia la maximización de sus posibilidades de cobro” (p. 211), además, añade lo siguiente:

En este caso, en los que probablemente la empresa se encuentra en situaciones de extrema iliquidez o, lisa y llanamente, en un escenario de insolvencia, la solución primaria está en el recurso a los procedimientos concursales, en sus diversas variables, sea para una reorganización o liquidación de la empresa.” (Goldenberg, 2016, p. 167)

Este aporte permite que se visualicen las dos posibilidades de una empresa que entra a un procedimiento concursal, puesto que resulta de forma exitosa por la consolidación de acuerdos con sus

acreedores y la oportunidad de reinserirse en el mercado o, por otro lado, puede terminar en una liquidación de la compañía.

Es necesario destacar que, el sistema concursal preventivo puede emplearse para personas naturales y jurídicas, sin embargo, tal como se ha mencionado anteriormente, en lo que nos ocupa solamente nos enfocaremos en las personas jurídicas, específicamente a empresas.

### **2.3. Los Stakeholders**

Los riesgos no solo los asume la empresa que se encuentra en situación de crisis, sino también existen los *stakeholder*, término en idioma inglés que fue utilizado por Edward Freeman en “Strategic Management: A Stakeholder Approach”, pues lo utilizaba para señalar a los que pueden ser o son afectados por las acciones que se toman en una empresa. (citado por González, 2007, p. 208)

Podríamos definir a los stakeholder como cualquier persona o entidad afectada o interesada por las actividades o la marcha de una empresa, como sus trabajadores, sus accionistas, los sindicatos, sus acreedores, entre otros. Además, Jensen (2009) menciona que el Stakeholder Theory propone que los directivos debiesen tomar en cuenta los intereses de todos los “stakeholders” (todas las personas o grupos que puedan influir en el bienestar de la empresa, no solo

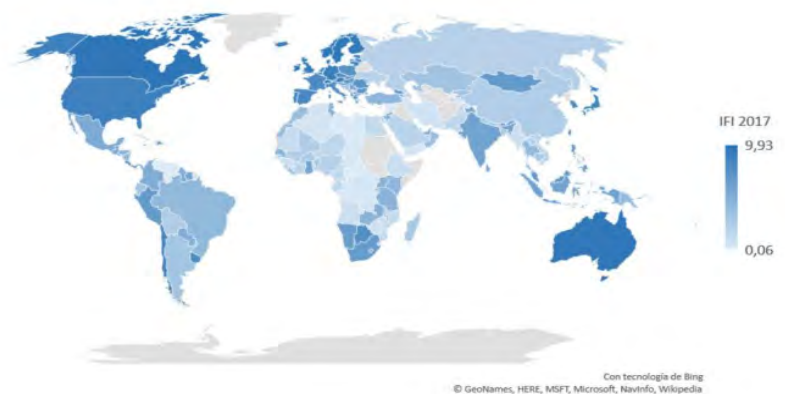
acreedores, sino todos quienes tengan relación directa e incluso indirecta con esta) de su empresa.

En tal sentido, la empresa es la obligada frente a los stakeholders, por lo cual, todas las implicaciones que tenga la compañía no solo afectan a trabajadores o socios, sino a todo el grupo de personas que tienen acreencias o relación con esta. Por ello, cuando la empresa se someta a un concurso preventivo y pueda idear una “reingeniería jurídica y financiera” se consideraría beneficioso para todos los implicados.

### **3. Procedimiento concursal preventivo: Un análisis económico en el caso ecuatoriano**

Para realizar un análisis respecto al procedimiento concursal preventivo a nivel nacional, necesariamente debemos volver a señalar aspectos de fortaleza institucional, la cual se refleja en el siguiente gráfico:

**Gráfico 2:** Mapa de situación de las instituciones en el mundo de acuerdo con el Índice de Fortaleza Institucional 2017



**Fuente:** Libertad y buen gobierno Liberdóm (2018, p. 6)

Con respecto a este gráfico, el Ecuador se encuentra en el nivel 0,6 (rango más bajo en el ranking internacional de fortaleza institucional), que nos indica, de forma clara, la existencia de una debilidad institucional que, según las dimensiones de fortaleza institucional, tenemos Instituciones Formales Débiles, con estabilidad e imposición baja.

Esta situación nacional es realmente preocupante, por lo cual, debe ser imprescindible implementar alta estabilidad e imposición, puesto que, si las instituciones “son estables y hechas cumplir, los actores pueden asumir que (a) otros seguirán las reglas del juego y (b) las reglas perdurarán en el futuro previsible.” (Levitsky y Murillo, 2010, p. 44)



Para esto, debemos considerar el índice que libertad económica existente en el país establecida en la siguiente tabla:

**Gráfico 3:** Índice de Libertad Económica: Región Americana

País	Ranking Mundial	Puntuación
Canadá	9	77.7
Estados Unidos	12	76.8
Chile	18	75.4
Santa Lucía	38	68.7
Jamaica	39	68.5
Uruguay	40	68.6
Perú	45	67.8
Colombia	49	67.3
Panamá	50	67.2
San Vicente y las Granadinas	55	65.8
Costa Rica	61	65.3
México	66	64.7
Barbados	67	64.7
Dominica	72	63.6
Bahamas	76	62.9
Guatemala	77	62.6
El Salvador	84	61.8
Paraguay	85	61.8
República Dominicana	89	61
Honduras	93	60.2
Nicaragua	107	57.7
Trinidad y Tobago	112	57
Guyana	113	56.8
Belice	123	55.4
Haití	143	52.7
Argentina	148	52.2
Brasil	150	51.9
Suriname	165	48.1
Ecuador	170	46.9
Bolivia	173	42.3
Cuba	178	27.8
Venezuela	179	25.9

**Fuente:** Índice de libertad económica 2019, The Heritage Foundation (citado por Consejo Nacional de Competitividad, 2019, p. 3)

En base a esta tabla, The Heritage Foundation y Wall Street Journal, evalúan la trayectoria y el estado de la libertad económica de los diferentes países del mundo, y clasifica por colores “tipos de

economía” a partir de ese patrón de referencia. (Consejo Nacional de Competitividad, 2019, p. 1). Se observa que Ecuador se ubica en la sección que denominan como “economía reprimida” y nos deja entrever las consecuencias que este contexto puede conllevar para el manejo adecuado del patrimonio de las empresas.

En ese sentido, el país debe tomar una posición en cuanto la necesidad de generar reformas que impacten favorablemente tanto en la economía como en sus agentes productivos privados. Las compañías son más una fuente de primordial de empleo y una forma fundamental de organizar la de producción de una manera competitiva. Sin embargo, al caer en posturas contradictorias y establecer “barreras legales”, se genera propensión al estancamiento financiero y debilidad institucional.

En tal sentido, la eficiencia económica -en líneas generales- a la que debemos apuntar es una que suponga la obtención de la mayor utilidad de un bien y/o servicio y su buen uso. (Zúñiga, 2002). Como tal, debemos recordar que existen tres tipos de eficiencia desde un punto vista teórico:

- a) Eficiencia técnica: No hay desperdicio de recursos en la producción o consumo de determinado bien y servicio.
- b) Eficiencia económica: Se produce lo máximo posible según nuestros recursos.

- c) Eficiencia distributiva: Se trasladan los bienes y servicios de sus usos menos valiosos a los más valiosos. (Zúñiga, 2002, p. 48)

Sin embargo, en lo que nos ocupa, podríamos más bien señalar la necesidad de alcanzar *eficiencia jurídico-empresarial*, que proponemos definir como:

Un contexto social e institucional con *alta imposición y estabilidad a largo plazo*. Es decir, implica un proceso de gobernanza y desarrollo de la acción colectiva que se adapta a las realidades empresariales para que, a través de instituciones formales fuertes, las organizaciones productivas (individuales y/o colectivas) puedan ingresar, permanecer y salir del mercado, promoviendo el respeto a la libertad económica y el fortalecimiento institucional.

### **3.1. Consideraciones conceptuales ius-económicas respecto al concurso preventivo en la legislación nacional**

#### **Costo-Beneficio, Costo-Efectividad, Costos de Transacción y Costos de Regulación**

Según Goldenberg (2016), no solo existen beneficios en un sistema, sino también se podrían estar ignorando los costos directos e indirectos que este procedimiento ocasiona (p. 213), pues hay que

tener en cuenta el costo-beneficio que las normativas concursales prevén. Para esto, debemos realizar un ‘análisis normativo’ (prescriptivo en un sentido económico) del procedimiento concursal preventivo mediante la consideración de los costos y beneficios (ACB) que “compara los beneficios y los costos de un proyecto particular y si los primeros exceden a los segundos entrega un elemento de juicio inicial que indica su aceptabilidad. Si, por el contrario, los costos superan a los beneficios, el proyecto debe ser en principio rechazado.” (Cohen y Franco, 1992, p. 171)

Además, la aplicación del ACB como herramienta de evaluación persigue como objetivo maximizar el bienestar social, promoviendo la asignación eficiente de los recursos. (Ortega, 2012, p. 147). Cabe considerar que “los costos o beneficios de las leyes pueden (y deben) también evaluarse cualitativamente en relación con alternativas que son potencialmente mejores a las presentadas por dicha ley y no solamente en relación con el statu quo”. (CEDICE, 2015). Por otra parte, puede resultar pertinente realizar estudios complementarios en base a los parámetros del Análisis Costo-Efectividad ACE, el cual debemos diferenciar con el costo-beneficio, puesto que el análisis costo-efectividad, aunque sigue la misma lógica, “compara los costos con la potencialidad de alcanzar más eficientemente los objetivos no expresables en moneda, sino en productos.” (Rosales, Bitrán e ISSSTE, 1996)

Por otra parte, un estudio técnico robusto implica considerar el costo de oportunidad que podemos definir como lo que una persona deja de ganar o de disfrutar, es decir esta dispuesta a sacrificar, cuando elije una alternativa entre varias disponibles. Aguilera (2017) amplía esta idea cuando determina que el costo de oportunidad “representa lo que se deja de ganar por haber rechazado el valor de la siguiente mejor opción.” (p. 330). También es importante el aporte de Nuño (2017) quien sostiene que: “El coste de oportunidad representa aquello a lo que renunciamos cuando debemos tomar una decisión, en busca de la mayor rentabilidad y la minimización del coste y los recursos invertidos.”, definición que aterriza este concepto al ámbito empresarial y nos permitiría considerar que el concurso preventivo permitiría encontrar un plan para la obtención de una mayor rentabilidad y, por ende, estabilidad.

Finalmente, debemos tener en cuenta los costos de transacción o costos de usar el mercado o mecanismo de precios. Respecto a los cuales es indispensable citar a Coase, pues fue él quien contribuyó de forma clave para identificar que la inversión o el riesgo de constituir una empresa depende de los costos de transacción, por lo que la información, la severidad del contrato, el cumplimiento y el orden legal actual también pueden afectar los bienes y servicios producidos. (Coase, 1988, citado por Estrada, 2012)

Salgado (2003) contribuye a una revisión del concepto cuando lo define como “aquellas características o dimensiones de una transacción que hacen el intercambio problemático o sumamente costoso” (p. 63). El mismo Coase amplía su línea argumental cuando considera que un costo de transacción, es todo lo que nos impide de celebrar un contrato (citado por Zúñiga, 2002). En síntesis, los costos de transacción son todos aquellos valores que se asumen al realizar una transacción, los cuales no son fijos y tienen la desventaja de crear incertidumbre, sin embargo, pueden ser aproximables (Valle y Méndez, 2019). Por ejemplo, los costos de transacción podrían comprender: a) costos legales o el tiempo que se debe emplear para un proceso o trámite, recibir información, búsqueda de información; b) costos para negociaciones, evaluaciones de decisiones; y c) *costos de agencia* o de control, entre otros que provienen de la incertidumbre.

Para ampliar el literal c, debemos referirnos a los costos de agencia que según Martínez (2006), suelen definirse como “la destrucción de valor que se produce a nivel empresa, a consecuencia de la falta de alineación entre los intereses de los accionistas/ propietarios de dicha empresa como tales y los de sus gerentes/ agentes en su rol de administradores.” Sin embargo, puede delimitarse a los costos de agencia como “los que se incurren en la vigilancia y control de los agentes de administración, esto es, directores y gerentes, en sentido particular, y a todo personal de

dirección y representación de la empresa.” (Sifuentes, 1998). Para fines de este capítulo, los costes de agencia son aquellos ‘valores’ que se producen en la empresa cuando los accionistas requieren vigilar a los administradores para que cumplan su rol en pro de los intereses de la junta de accionistas y, en sí, de la empresa.

Los costos de regulación para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) los costos de regulación son:

El término “costos regulatorios” abarca todos los costos atribuibles a la adopción de un requisito regulatorio, ya sea de naturaleza directa o indirecta y si es asumido por empresas, consumidores, gobierno y sus respectivas autoridades (es decir, contribuyentes) u otros grupos. (OECD, 2014, p. 11)

Estos costos pueden representarse a través de obstáculos legales (o barreras legales). Debido a que el procedimiento concursal preventivo consta en tres legislaciones nacionales que, aunque tengan sujetos y objetivos diferentes, conllevan un ‘nivel -elevado- de sacrificio’ (para aquellos agentes económicos que deban dirimir para acatar y/o ‘beneficiarse’ de su aplicación).

### **3.1.1. Normativa ecuatoriana referente al procedimiento concursal preventivo**

En el año 2006 en Ecuador se promulgó la Ley de Concurso Preventivo (LCP), que tiene como propósito permitir que las compañías mercantiles ecuatorianas tengan la posibilidad de, en calidad de deudoras, solicitar un concurso preventivo para acordar una planificación financiera que promueva la rentabilidad empresarial.

Por lo cual, se establece en su artículo 1 lo siguiente:

Art. 1. Las compañías constituidas en el país, sujetas a vigilancia y control por la Superintendencia de compañías, que tengan un activo superior a diez mil quinientos quince 60/100 (10.515,60) dólares de los Estados Unidos de América o más de cien trabajadores permanentes, con un pasivo superior a cinco mil doscientos cincuenta y siete 80/100 (5.257,80) dólares de los Estados Unidos de América, no podrán ser declaradas en quiebra sino cuando previamente hayan agotado los trámites del concurso preventivo.

Para efectos de esta Ley no se considerarán como pasivos las sumas adeudadas a los socios o accionistas por concepto de utilidades o dividendos no pagados, ni los créditos a favor de éstos, los administradores, comisarios, ni tampoco los rubros de capital y reservas. (LCP, 2006, art. 1)



En tal sentido, se podría considerar que la ‘metodología’ de los activos y pasivos ‘tope’ podría abrir un universo de empresas muy amplia para el acceso a dicho concurso. Sin embargo, últimamente se han promulgado normas que pueden ampliar aún más ese universo, tales como la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación LOEI (2020) con la denominada *reestructuración de emprendimientos* y la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del Covid-19 (2020) con el denominado *concurso preventivo excepcional*.

Cabe mencionar que, las compañías que ingresen al concurso preventivo y se adecúen a los requisitos normativos no podrán ser declaradas en quiebra, puesto que deben agotar el concurso preventivo. Esto es importante porque desde la admisión del concurso preventivo tienen un mecanismo de protección para el deudor mientras negocia un acuerdo y por ello, en caso de cualquier juicio o reclamo en su contra y sus obligaciones pendientes, estas se congelan durante el concurso preventivo, incluso después de expedida la sentencia o medida cautelar contra el deudor, a excepción de aquellos procesos ocasionados de relaciones laborales. (Puentes, 2020; López Suárez, 2020)

En la misma línea, la nueva Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación establece los siguientes parámetros:

(...) Toda persona natural o jurídica con antigüedad menor a cinco años a la fecha de entrada en vigencia de esta Ley, que tenga menos de 49 trabajadores y ventas menores a 1.000.000 USD, podrá constar en el RNE para beneficiarse de los incentivos previstos en esta Ley (...). (LOEI, 2020, art. 12)

Con el requisito también de constar en el Registro Nacional de Emprendimiento para poder aplicar un tipo de concurso preventivo:

Artículo 46.- Reestructuración de Emprendimientos. - Todo emprendedor, definido como tal en esta Ley, y que sea una persona jurídica bajo control de una Superintendencia, puede acogerse al procedimiento administrativo establecido en este capítulo, para facilitar un acuerdo con sus acreedores, a fin de reestructurar el emprendimiento, siempre que no hubiere sido declarada en disolución previamente. (LOEI, 2020, art. 46)

En adición, la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del Covid-19 (2020), establece en su artículo 26 un concurso preventivo excepcional en caso de que no se llegue a un concordato con los acreedores, el cual está dirigido a:

(...) las sociedades según la definición del art. 98 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, todo tipo de

patrimonios autónomos, fideicomisos, clubes deportivos, y/o las personas naturales que se dediquen al ejercicio de actividades comerciales, económicas, culturales y recreacionales, podrán acogerse a los procedimientos establecidos en este Capítulo (...) (Ley de Apoyo Humanitario, 2020, art. 26)

Respecto a lo anteriormente señalado, las sociedades, según la LORTI (2004):

Art. 98.- Definición de sociedad.- Para efectos de esta Ley el término sociedad comprende la persona jurídica; la sociedad de hecho; el fideicomiso mercantil y los patrimonios independientes o autónomos dotados o no de personería jurídica, salvo los constituidos por las Instituciones del Estado siempre y cuando los beneficiarios sean dichas instituciones; el consorcio de empresas, la compañía tenedora de acciones que consolide sus estados financieros con sus subsidiarias o afiliadas; el fondo de inversión o cualquier entidad que, aunque carente de personería jurídica, constituya una unidad económica o un patrimonio independiente de los de sus miembros.

Con este marco, si bien la regla está dirigida a personas jurídicas en sus diferentes clases, se refiere especialmente a las compañías mercantiles. Con esta similitud e independientemente las limitaciones de la Ley de Concurso Preventivo, ésta podría

absorber estos sujetos para así considerar un concurso preventivo para emprendimientos y las PIMES, unificándose en un solo procedimiento, ahorrándose aquellas barreras legales que lo único que traen como consecuencia son costos de regulación y de transacción.

Estas consideraciones también se podrían adaptar con respecto a los objetivos de las leyes mencionadas. En ese sentido, los objetivos de la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación constan en el artículo 2 de dicha ley. Sin embargo, el literal que nos compete es el siguiente: “b) Facilitar la creación, operación y liquidación de emprendimientos” (LOEI, 2020), al contrario, la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del Covid-19 (2020), referente a los procedimientos excepcionales tienen como objetivo enfrentar las consecuencias económicas derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del Covid-19, 2020, art. 26)

Aunque existe una Ley de Concurso Preventivo (2006) que pretende facilitar la extinción de obligaciones de las compañías que puede adherirse a esta ley, ésta debería ser sólida y no tener barreras de permanencia y/o de salida del mercado, pues debería ser aplicable y eficaz a largo plazo basados en la realidad empresarial nacional, no solo a corto plazo como están previstas.

Por esto, considerar el hecho que las tres normas requieren de un procedimiento concursal con el objetivo de facilitar la permanencia o la salida de las empresas durante una crisis económica, nos permite sostener que las normas persiguen el mismo fin. Aunque, si bien la Ley Humanitaria se creó para mitigar los efectos de la crisis sanitaria del COVID-19 (la pandemia que ha provocado una crisis mundial), consideramos que no se debería implementar normas respecto a un concurso excepcional respecto de compañías mercantiles, pues la Ley del Concurso Preventivo, por economía procesal, simplificación de trámites y menor costos de regulación (costos regulatorios u asociados).

Además, el régimen concursal requiere de un operador especializado para gestionar el procedimiento, aunque en la Ley del Concurso Preventivo se establece que será la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros SCVS (LCP, 2020, art. 3). Sin embargo, dicha entidad de por sí tienen carga burocrática y trámites retrasados lo que supone -un necesario- proceso de reingeniería de recursos que permitan al organismo estatal responder a este rol.

Bajo esa misma línea, la reestructuración de emprendimientos puede solicitarse ante la misma SCVS o ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, según la naturaleza del emprendimiento que se acoja a este procedimiento (LOIE, 2020, art. 47), en cambio, la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para

Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del Covid-19, establece que dicho concurso preventivo lo gestiona el Juez, el cual podría resultar siendo poco eficiente si se toma en cuenta la carga judicial del mismo.

Por ello, a partir de lo establecido en los párrafos anteriores, constituye una desventaja potencial atribuir estas facultades a operadores judiciales, órganos o instituciones administrativas no especializadas, debido a que la experiencia nos lleva a asumir que se producirá un nuevo escenario de multiplicación de gestiones -burocráticas- demoradas, mayores costos administrativos y regulatorios, entre otros. En tal sentido, se a modo de *conditio sine qua non*, se necesita de un operador administrativo o judicial especializado que permita un procedimiento expedito y eficaz, tomando en cuenta que, aunque generaría costos administrativos, a largo plazo sería una alternativa potencialmente eficaz y beneficiosa para impulsar el desarrollo del *proceso de mercado*.

Con respecto al procedimiento, nos referiremos específicamente al de la Ley del Concurso Preventivo, puesto que es necesario que la compañía se encuentre en cesación de pagos (LCP, 2006, art. 3), que la misma ley define como:

Un estado patrimonial del deudor que se manifiesta externamente por uno o más de los siguientes hechos:

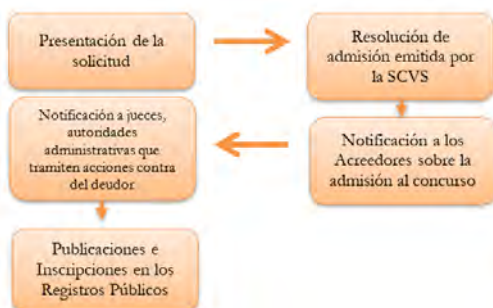
a) El incumplimiento por más de sesenta días de una o más obligaciones mercantiles y que representen en total el treinta por ciento o más del valor del pasivo total; b) Encontrarse ejecutoriados e insatisfechos uno o más autos de pago o providencias equivalentes, dictados contra el deudor, dentro de cualquier procedimiento judicial o administrativo y cuyas cuantías representen un treinta por ciento o más del valor del pasivo total; c) Endeudamiento por obligaciones de plazo menor de dos años y que exceda al ochenta por ciento del valor de sus activos; siempre que se demuestre que no podrá ser cubierto oportunamente; d) Daciones en pago de los activos necesarios para la actividad empresarial, que representen en conjunto más del veinte por ciento del activo de la empresa; y, e) Cuando las pérdidas alcancen el cincuenta por ciento o más del capital social y la totalidad de sus reservas.

El trámite del concurso preventivo requiere aludir específicamente a la ley en mención por ser la norma general y principal de este procedimiento. Para ello, podemos considerar como una característica, que solicitar el concurso permanece dentro del ámbito potestativo tanto de el acreedor como el deudor. Sin embargo, su particularidad más importante es que el propio deudor decide adherirse a este concurso para cumplir con sus obligaciones pendientes y atribuir de estabilidad y rentabilidad a la empresa. Además, como lo menciona Puente (2020), la empresa que haya entrado a una o más causales de cesación de pagos, tiene un plazo de 60 días para presentar la solicitud.

Cabe recalcar que, las obligaciones laborales tienen un tratamiento especial, pues estas serán pagadas antes de ejecutar cualquier acuerdo, ya que es un privilegio normativo. Además, este acuerdo debe ser aprobado mediante resolución de la Superintendencia de Compañías, que indicará el estricto cumplimiento de las cláusulas establecidas en el acuerdo. (López Suárez, 2020) Es importante mencionar que, si no se llega a tener un concordato o no concurran los acreedores que representen el 75% del valor de los créditos admitidos, el Superintendente de Compañías lo declarará como terminado y las cosas volverán a su estado anterior. (LCP, 2006, art. 31)

En cuanto al procedimiento, podríamos referirnos al siguiente gráfico:

**Gráfico 4:** Procedimiento concursal preventivo



**Fuente:** Puente (2020); Ley de Concurso Preventivo (2006)

**Elaboración:** Propia



Dentro del proceso de negociación concursal existen diferentes fases, las cuales se indican en el siguiente gráfico:

**Gráfico 5:** Fases del proceso – Negociación concursal



**Fuente:** Puente (2020)

**Elaboración:** Puente (2020)

En tal sentido, podríamos determinar que en un tiempo estimado se puede concluir el concurso preventivo entre cuatro a seis meses. Además, como regla de las decisiones concordatarias, el plazo máximo que podrá tener el acuerdo será de siete años desde la suscripción (LCP, 2006, art. 30), considerando que una vez se suscrita el acta con los acuerdos, el Superintendente de Compañías debe, en el plazo de 10 días y mediante resolución, aprobar el acuerdo si lo considera legal y una vez aprobado, será obligatorio para todos los acreedores dando por finalizado el trámite de concurso preventivo. (LCP, 2006, art. 32)

#### 4. Comparación normativa

Las razones que sustentan la eficacia que un sistema concursal preventivo dinámico puede tener en otros países, supone un aspecto que debe considerarse debido a la propensión por trasplantar legislación de forma *naive*. Esto al amparo de la paradoja que conlleva asumir que una legislación extranjera pueda adaptarse de manera inmediata a la situación empresarial y del mercado del país. Como consideración ulterior, no podemos dejar de señalar que, en países de Sudamérica como Perú, Argentina, Ecuador, Venezuela, Chile, entre otros, también se ha implementado la figura del sistema concursal. Esta salida jurídica opera para personas naturales comerciantes o no comerciantes y personas jurídicas (dado el carácter preliminar de este capítulo, su estudio *in extenso* será sujeto de un aporte posterior).

##### Estados Unidos

En países como Estados Unidos, se establece una especie de concurso de acreedores. En el *US Code, Chapter 13, Title 11, Bankruptcy Law* se instituye una herramienta jurídica útil, a través de la cual, el deudor con ingresos regulares solicita este procedimiento que: “consiste en la estructuración de un plan de pago que tendrá como plazo de tres a cinco años en virtud del ingreso percibido por el deudor, sin embargo, este procedimiento nunca podrá exceder los cinco años.” (Espinosa Serrano, 2009, p. 102-103)

Además, este procedimiento está diseñado para proporcionar seguridad a quienes intentan rescatar su patrimonio en crisis. Aunque finalmente se vean obligados a liquidar para cancelar sus deudas en caso esto resulte necesario. El deudor debe mantener cierta parte de sus “ingresos” como condición para cumplir con el plan de pago bajo los términos que llegase a acordar con los acreedores. Por lo tanto, el *US Code, Chapter 11, Title 11, Bankruptcy Law* implica en primer lugar una *reorganización de deudas*, que en opinión de Espinosa Serrano (2009, p. 102-103) se sigue asemejando al concurso preventivo ecuatoriano.

## **Perú**

En el caso peruano, se ejecutó una reingeniería jurídica de las sociedades en crisis basándose en las necesidades del mercado, pues la Ley General del Sistema Concursal (2002) cuenta con procedimientos (ordinario y preventivo) que permiten a las compañías que tienen viabilidad patrimonial se puedan sujetar a una reestructuración patrimonial a cargo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual INDECOPI. (Flores, 2018)

En 2019, se registraron 657 expedientes ingresados a la Sala Especializada de Procedimientos Concursales y se concluyeron 508 procesos (INDECOPI, 2020), lo cual nos lleva a destacar la

importancia de la eficacia y la aplicación efectiva de la normativa peruana respecto al concurso preventivo, que da paso a la confiabilidad en el sistema establecido y a la posible recuperación financiera de las empresas.

En la página del INDECOPI se establece que el procedimiento concursal tiene una duración de 90 días hábiles, que, en relación al caso ecuatoriano, resulta simplificado (esto explicaría en un porcentaje la eficiencia de este concurso en Perú). Además, podemos considerar al INDECOPI como una institución especializada con facultades, establecidas en el Decreto Legislativo No. 807 (1996), respecto a propiedad intelectual, barreras burocráticas, protección al consumidor, Derecho de competencia, Derecho concursal, entre otros.

Cabe considerar que debido a la situación de crisis por la pandemia por COVID-19, se emitió el Decreto Supremo 102-2020-PCM que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo No. 1511 (2020), reglamento que crea un Procedimiento Acelerado de Refinanciación Concursal como mecanismo para que las empresas en crisis por la pandemia puedan refinanciar sus deudas y evitar la ruptura de pagos. (Diez Canseco – Competencia & PI, 2020)

Sin embargo, este tipo de procedimiento es transitorio, ya que se dispuso que solo se podrá solicitar hasta el 31 de diciembre de

2020, además, que su manejo es netamente virtual desde la solicitud hasta la junta de acreedores que con voto mayoritario aprueban un plan de refinanciamiento por parte de la deudora empresarial, para esto, el INDECOPI es la institución encargada del cumplimiento de la PARC.

## **Colombia**

En el caso colombiano, está vigente la Ley 1116 denominada Régimen de Insolvencia Empresarial (2006), dirigida, tal como señala su nombre, a compañías mercantiles y a personas naturales comerciantes con ciertas exclusiones según su artículo 3:

PERSONAS EXCLUIDAS. No están sujetas al régimen de insolvencia previsto en la presente ley: 1. Las Entidades Promotoras de Salud, las Administradoras del Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. 2. Las Bolsas de Valores y Agropecuarias. 3. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Lo anterior no incluye a los emisores de valores, sometidos únicamente a control de la referida entidad. 4. Las entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria que desarrollen actividades financieras, de ahorro y crédito. 5. Las sociedades de capital público, y las empresas industriales y comerciales del Estado nacionales y de cualquier nivel territorial. 6. Las entidades de derecho público, entidades territoriales y descentralizadas. 7. Las

empresas de servicios públicos domiciliarios. 8. Las personas naturales no comerciantes. 9. Las demás personas jurídicas que estén sujetas a un régimen especial de recuperación de negocios, liquidación o intervención administrativa para administrar o liquidar. PARÁGRAFO. Las empresas desarrolladas mediante contratos que no tengan como efecto la personificación jurídica, salvo en los patrimonios autónomos que desarrollen actividades empresariales, no pueden ser objeto del proceso de insolvencia en forma separada o independiente del respectivo o respectivos deudores

De manera posterior a las reformas, la Ley 1429 (2010), empezó también a promover la creación de empresas, disminuyendo ciertos requisitos de admisibilidad y reduciendo barreras burocráticas para realizar los trámites de forma simplificada en cuando a la liquidación de empresas, con ello, comenzó también a dirigirse a los emprendimientos, puesto que se formaliza el trabajo informal y se genera empleo.

Cabe indicar que Colombia en el año 2019 se presentaron 1.272 solicitudes de insolvencia, de las cuales 997 de reorganización y 275 de liquidación, lo que quiere decir que la mayor cantidad de las empresas buscan permanecer activas mediante el procedimiento expedito y eficaz establecido en la Ley 1116 y una menor cantidad entraron a una liquidación forzosa. (Puente, 2020)

En ese sentido, el Régimen de Insolvencia Colombiano tiene como objetivos la protección del crédito y la recuperación y conservación de empresa mediante un mecanismo de reorganización mediante acuerdos, para que las empresas que se denominan “viables” puedan reestructurarse operacionalmente y se mantengan activas, y en el caso de empresas que deban salir del mercado, puedan obtener una liquidación pronta y ordenada. (Ley 1116, 2006, art. 1)

En Colombia, el Decreto Ley 560 (2020) se estableció con el objetivo de tener un sistema de recuperación empresarial con mayor impacto e incluyente, es decir, con soluciones efectivas y simplificadas para sobrellevar la crisis económica de las compañías. Lo expuesto se deriva de la revisión del gráfico No. 6 (Panorama de la Insolvencia en Colombia):

**Gráfico 6: Panorama de la Insolvencia en Colombia**

**Fuente:** Superintendencia de Sociedades (citada por Rojas Castañeda, 2020)

Este Decreto tiene duración de dos años desde su vigencia y creó dos instituciones jurídicas: a) el proceso de negociación de emergencia de acuerdos de reorganización; y b) el procedimiento de recuperación empresarial. En común tienen la duración limitada a un máximo de tres meses. Además, se establece que cualquier ‘objeción’ podrá ser sometida a mecanismos de solución alternativa de controversias. (Cámara de Comercio Oriente Antioqueño, 2020)



## 5. Conclusiones

A partir del marco teórico-conceptual y de los argumentos que han sido explicados en este capítulo, consideramos que la Ley de Concurso Preventivo ecuatoriana no cumple con el objetivo de permitir que las sociedades que lo solicitan puedan permanecer y/o salir ordenada y eficientemente del mercado. Por lo tanto, es necesario que la reformulación de este mecanismo legal conlleve el establecimiento de un marco normativo sólido e institucionalmente competitivo.

Además de la citada norma, la nueva Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación y la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del Covid-19, deberían unificar el procedimiento concursal. Una alternativa sería su integración legal con miras a implementar un marco consolidado y de fácil discernimiento para que no solamente empresas organizadas a través de “esquemas convencionales” sino también emprendimientos y PYMES puedan acceder a su tutela afrontando menores costos de transacción. Esto implica también la introducción de un paquete de mejoras regulatorias que eliminen barreras burocráticas y legales.

Considerando la experiencia peruana, resultaría favorable la creación de un área especializada (dentro de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros) en el manejo del procedimiento del concurso preventivo que promueva permanentemente la simplificación de trámites y oriente a las empresas. Por ello, es necesaria la eliminación de las limitaciones normativas existentes y la adopción un procedimiento que tenga menor duración y facilite el cumplimiento de obligaciones por parte de las compañías con sus acreedores evitando estas deban recurrir a una liquidación forzosa y/o a mantenerse activas de forma ineficiente.

## BIBLIOGRAFÍA

- Aedo, C. (2018). La delimitación de la responsabilidad contractual y la aquiliana y su incidencia en la reparación del daño moral. En Vidal, A. (Dir.). Severin, G. (Ed.). *Estudios de Derecho de Contratos en homenaje a Antonio Manuel Morales Moreno*. Santiago: Thomson Reuters.
- Aguilera, A. (2017). El costo-beneficio como herramienta de decisión en la inversión en actividades científicas. *Cofin Habana*, 12(2), (pp. 322-343). Recuperado de: <http://scielo.sld.cu/pdf/cofin/v11n2/cofin22217.pdf>
- Aguilera, N. (2020). *Régimen concursal, ¿Una solución ante un escenario de crisis?* Recuperado de: <https://mailchi.mp/ea02ce119183/el-regimen-concursal-una-solucion-ante-un-escenario-de-crisis>
- Alais, M. (2017). *Hacia el auténtico reconocimiento de la identidad autopercebida*. (Tesis). Buenos Aires, Universidad San Andrés.
- Alonso Ubidia, A. (2010). *La opción por un modelo económico concurrencial dentro de Derecho de la competencia y de la propiedad industrial, intelectual y comercial*. Madrid: La Ley, Aberdrola, Asociación/ Colegio de Ingenieros ICAI.

Alsina, H. (1961). *Tratado Teórico Práctico de Derecho procesal Civil y Comercial*, Tomo III. Buenos Aires, Argentina.

Álvarez Caro, M. (2016). El derecho a la supresión o al olvido. En J. L. Piñar Mañas (dir.), *Reglamento General de Protección de Datos, hacia un nuevo modelo europeo de privacidad*. Madrid: Reus.

Álvarez Caro, M. (2016). El derecho de rectificación, cancelación, limitación del tratamiento, oposición y decisiones individuales automatizadas. En J. L. Piñar Mañas (dir.), *Reglamento General de Protección de Datos, hacia un nuevo modelo europeo de privacidad*. Madrid: Reus.

Álvarez Rigaudias, C. (2015). El poder del usuario digital. En Rallo Lombarte y García Mahamut (eds.), *Hacia un nuevo derecho europeo de protección de datos*. Valencia: Tirant lo Blanch.

Alvear, P. (2020). *Competencia desleal: Criterios de su autonomía disciplinar* (física y en epub ed.). Buenos Aires: Ediar.

Argandoña, A. (2015). La función social de las empresas. *Economía, Ética y RSE, BlogNetwork*. Recuperado de: <https://blog.iese.edu/antonioargandona/2015/06/27/la-funcion-social-de-las-empresas/>

Asamblea Nacional del Ecuador. Código Orgánico Administrativo (COA). [Cod.]. (2017). R. O. 31 de 07 de julio de 2017.

Asamblea Nacional del Ecuador. Código Orgánico de la Función Judicial. [Cod.]. (2009). R. O. 544 del 09 marzo de 2009. Recuperado de: <http://www.lexis.com.ec/wp-content/uploads/2017/09/CODIGO-ORGANICO-DE-LA-FUNCION-JUDICIAL.pdf>

Asamblea Nacional del Ecuador. Código Orgánico General de Procesos. [Cod.] (2015). R. O. 506 de 22 de mayo de 2015.

Asamblea Nacional del Ecuador. Código Orgánico Integral Penal. [Cod.]. (2014). RO. 180 de 10 de febrero de 2014.

Asamblea Nacional del Ecuador. Código Orgánico Monetario y Financiero. [Ley]. (2014). R. O. 332 de 12 de septiembre de 2014.

Asamblea Nacional del Ecuador. Ley de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del Covid-19. [Ley]. (16 de junio de 2020). R. O. 225 de 16 de junio de 2020.

Asamblea Nacional del Ecuador. Ley Orgánica de Comunicación. [Ley]. (2013). R. O. 22 de 25 de junio de 2013.

Asamblea Nacional del Ecuador. Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación. [Ley de 2020]. (28 de febrero de 2020). R. O. 151 de 28 de febrero de 2020.

Asamblea Nacional del Ecuador. Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. [Ley]. (2011). R. O. 555 de 13 de octubre de 2011.

Asamblea Nacional del Ecuador. Ley de Seguridad Pública y del Estado. [Ley.]. (2009). R. O. 35 de 28 de septiembre de 2009.

Aynès, L., Malaurie, P. y Stoffel-Munck, P. (2005). *Les obligations*. Paris: Defrénois.

Azurmendi, A. (2014). *Derecho de autodeterminación informativa y el derecho al olvido: la generación “google” del derecho a la vida privada*. Universidad de Navarra, UOC.

Baratta, M. (2012). La identidad nacional durante la Guerra del Paraguay. Representaciones, lenguajes políticos y conceptos en el diario La Nación Argentina (1862-1870). *Almanack*, (3), pp. 82-98.

- Barrio Andrés, M. (2017). *Fundamentos del derecho de Internet*. Madrid: Foros y Debates, CEPC.
- Belda de Mergelina, R. (2010). *Control de Concentraciones, ayudas públicas y falseamiento de la libre competencia por actos de competencia desleal dentro de Derecho de la competencia y de la propiedad industrial, intelectual y comercial*. Madrid: La Ley, Iberdrola, Asociación Colegio de Ingenieros del ICAI.
- Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (1992). *La regulación contra la competencia desleal en la Ley de 10 de Enero de 1991, Madrid, Boletín Oficial del Estado*. Madrid: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid.
- Bernal Fandiño, M. (2013). La naturaleza jurídica de la responsabilidad civil derivada de la inobservancia de los deberes colaterales de conducta. *Vniversitas*, (126), pp. 39-64.
- Berrocal Lanzarot, A. I. (2017). *Derecho de supresión de datos o derecho al olvido*. Madrid: Colección Jurídica General.
- Bianca, M. (2007). *Derecho Civil. El contrato*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

- Borges, F. J. L. y Arias, G. G. (2009). *Discrecionalidad y legalidad*. Recuperado de: <https://ebookcentral-proquest-com.pucesa.idm.oclc.org>
- Breyer, S. (2005). Analizando el fracaso de la regulación: sobre malas combinaciones, alternativas menos restrictas y reforma. *Themis-Revista de Derecho*. (52).
- Bulygin, E. (1991). *Algunas consideraciones sobre los sistemas jurídicos*. Recuperado de: <http://cervantesvirtual.com/obra/algunas-consideraciones-sobre-los-sistemas-juridicos-0>
- Business School OBS. (2017). *Barreras de salida: costes y beneficios*. Recuperado de: <https://obsbusiness.school/es/blog-investigacion/direccion-general/barreras-de-salida-costes-y-beneficios>
- Cámara de Comercio Oriente Antioqueño. (2020). Medidas transitorias especiales en procesos de insolvencia. Decreto 560 de 2020. Recuperado de: <https://www.ccoa.org.co/Portals/0/ABC%20Decreto%20560%20insolvencia.pdf?ver=2020-05-07-084609-143>
- Canfield, J. (2007). *Multiple Streams of Inspiration Volume 1: Enlightening, Empowering, Encouraging, Inspiring*, volúmen 1. Dallas: Brown Books Publishing Group.



- Carbonnier, J. (2000). *Droit civil. T.4. Les obligations*. Paris: PUF.
- Carrión Lugo, J. (2007). *Tratado de Derecho Procesal Civil*, volumen II, 2da edición. Lima, Perú: Editora Jurídica Grijley.
- Cassagne, J. C. (2002). *Derecho Administrativo*, tomo I, 7ma edición. Buenos Aires: Abeledo-Perrot.
- Cassagne, J. C. (2016). *Los grandes principios del derecho público (constitucional y administrativo)*. Recuperado de: <https://ebookcentral-proquest-com.pucesa.idm.oclc.org>
- Castillo Mayorga, F. A. (2008). La cesión de crédito. En: Mantilla F. y Ternera F. (dir.), *Los contratos en el derecho privado*. (pp. 415-434). Bogotá: Colombia, Legis y Universidad del Rosario.
- Castillo Pantaleón, J. M. (2012). *La nacionalidad dominicana*. Santo Domingo: Editora Nacional.
- Castro De Cifuentes, M. (2018). El hecho ilícito. Nociones fundamentales. El sistema de responsabilidad civil. En: Castro de Cifuentes (Coord.), *Derecho de las obligaciones, con propuestas de modernización*, t. III, 2ª ed., (pp. 1-41). Bogotá: Colombia, Universidad de los Andes y Editorial Temis.

- Catalano, P. (1991). Identidad jurídica de América Latina: Derecho Romano y Sistema Latinoamericano. *Revista de Investigaciones Jurídicas*, 15, pp. 101-116.
- Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, A.C. CEDICE Libertad. (2015). *Manual “Análisis costo-beneficio de las leyes”*. Caracas: CEDICE. ISBN: 978-980-7118-24-8
- Chainais, C., et al. (2008). *Terminologie contractuelle commune*, Paris: Société de Législation Comparée.
- Chan Arellano, A. (2011). Solo estamos saliendo. Sobre la buena fe en la etapa de las tratativas. *Ius et Veritas*, (43), pp. 44-57.
- Chantepie, G. y Latina, M. (2018). *Le Nouveau droit des obligations. Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil*. París : Francia, Dalloz.
- Chéliz Inglés, M. del C. (2016). El “derecho al olvido digital”. Una exigencia de las nuevas tecnologías, recogida en el futuro reglamento general de protección de datos. *Revista Actualidad Jurídica Iberoamericana*, (5).
- Cohen, E. y Franco, R. (1992). *Evaluación de proyectos sociales*. México: Siglo XXI editores.

Comadira, J. (2004). *Derecho Administrativo: Acto Administrativo, Procedimiento Administrativo. Otros Estudios*, 2da edición. Buenos Aires: Abeledo-Perrot.

Comisión de las Comunidades Europeas. Reglamento CE 800/2008 de la Comisión. (2008). D. O. de 6 de agosto de 2008.

Congreso de la República de Colombia. Ley de Formalización y Generación de Empleo. [Ley 1429]. (2010). D. O. 47.937 de 29 de diciembre de 2010.

Congreso de la República de Colombia. Ley de Insolvencia Empresarial. [Ley 1116 de 2006]. (27 de diciembre de 2006). D. O. 46.494 de 27 de diciembre de 2006.

Congreso de Perú. Facultades, normas y organización del INDECOPI. [Decreto legislativo 807]. (1996). El Peruano de 18 de abril de 1996.

Congreso de Perú. Ley General del Sistema Concursal. [Ley 27809]. (2002). El Peruano de 8 de agosto de 2002.

Congreso Nacional del Ecuador. Ley de Compañías. [Ley de 1999]. (23 de octubre de 2018). RO. 353 de 23 de octubre de 2018.

Congreso Nacional del Ecuador. Ley de Concurso Preventivo. [Ley]. (21 de diciembre de 2006). R. O. 422 de 21 de diciembre de 2006. Recuperado de: <https://vlex.ec/vid/codificacion-12-ley-concurso-643461585>

Congreso Nacional del Ecuador. Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. [Ley 21]. (2000). R. O. 116 de 10 de julio de 2000.

Congreso Nacional del Ecuador. Ley Orgánica de la Salud. [Ley 67]. (2006). R. O. 423 de 22 de diciembre de 2006.

Congreso Nacional del Ecuador. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI. [Cod. 26]. (2004). R. O. 463 de 17 de noviembre de 2004.

Consejo Nacional de Competitividad. (2019). *Índice de libertad económica*. [Gráfico 3]. República Dominicana. Recuperado de: <http://www.competitividad.org.do/wp-content/uploads/2019/03/%C3%8Dndice-de-Libertad-Econ%C3%B3mica-2019-1.pdf>

Constitución de la República del Ecuador [Const.]. (2008). 2da Ed. CEP.

- Corral Talciani, H. (2016). *Estudios sobre contratos y obligaciones*. Bogotá: Colombia, Ibáñez y Centro de estudios de derecho comparado.
- Corte Constitucional del Ecuador. (2020). Dictamen Nro. 1-20-EE/20 de 19 de marzo de 2020. R. O. Edición Especial 318 de 7 de febrero de 2020.
- Corte Constitucional. (9 de diciembre de 2010). Sentencia C-1008. [MP Luís Ernesto Vargas Silva].
- Corte Interamericana de DDHH. (2001). Caso Baena y otros Vs. Panamá. 2 de febrero de 2001.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2001). Caso “Baena”.
- Corte Nacional. Resolución 0096-2018. (2018). Sala de lo Civil y Mercantil de 9 de julio del 2018 Juicio Reivindicatorio 00180-2017.
- Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. (1 de junio de 2005). Exp. 05001-3103-014-1999-00666-01. (M.P. Manuel Ardila Velásquez)

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación civil. (10 de marzo de 2020), rad. 18001—31—03—001° 2010° 00053—01 [MP Ariel Salazar Ramírez]

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación civil. (12 de agosto de 2002), exp. 6151.[ MP José Fernando Ramírez Gómez].

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación civil. (13 de diciembre de 2001) rad. 6775. [MP Manuel Ardila Velásquez].

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. (16 de diciembre de 2010). Exp. 05001-3103-010-2000-00012-01. (M.P. Arturo Solarte Rodríguez)

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. (16 de julio de 2008), rad. 1997-00457. [MP Pedro Octavio Munar Cadena].

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación civil. (19 de diciembre de 2006), exp. 1998-10363-01. [MP Carlos Ignacio Jaramillo].

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. (25 de mayo de 2006). Exp. 1469. (M.P. Pedro Octavio Munar Cadena)

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación civil. (28 de junio de 1989). [MP Rafael Romero Sierra].

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación civil. (5 de agosto de 2014), exp. 11001 3103 036 2004 00037 01. [MP Margarita Cabello Blanco]

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación civil. (5 de julio de 2011), exp. 19001-3101-003-2000-00183-01. [MP Ruth Marina Díaz Rueda]

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación civil. (8 de marzo de 1995). Sentencia 4473. [MP Pedro Lafont Pianetta].

Davara Rodríguez, M. (2013). El derecho al olvido en Internet. *Diario La Ley*, 8137.

De la Cruz Camargo, D. (2014). *La competencia desleal en Colombia, un estudio sustantivo de la ley*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

De la Maza, I., Pizarro, C. y Vidal, A. (Coord. y Ed.). (2017). *Los Principios Latinoamericanos de Derecho de los Contratos*. Madrid: España, Colección de derecho privado.

De Terwangne, C. (2012). Privacidad en Internet y el derecho a ser olvidado/derecho al olvido, IDP. *Revista de Internet, Derecho y Política*, (13).

Decreto Supremo No. 357. (1970). R. O. 4 del 7 de septiembre de 1970.

Decreto Supremo No. 965. (1973). R. O. 376 de 5 de enero de 1973.

Deroussin, D. (2007). *Histoire des obligations*, Paris: Económica.

Devis Echandía, H. (2004). *Teoría General del Proceso*, 3ra edición. Buenos Aires: Editorial Universidad. Buenos Aires.

Diez Canseco – Competencia & PI. (2020). Procedimiento Acelerado de Refinanciación Concursal (PARC): Reglamento del D.L. N° 1511. Recuperado de: <https://url2.cl/g5qBU>

Dominguez, C. (2005). Los principios que informan la responsabilidad en el Código civil: Versión original y mirada al presente. En Facultad de Derecho Universidad de Chile (ed.). *Sesquicentenario del Código Civil de Andrés Bello*, tomo II. Santiago: LexisNexis.

Döpfner, M. (2014). Carta abierta a Eric Schmidt. Por qué tememos a Google. (Traducción al castellano de Graciela Rapaport, original en alemán: Offener Brief an Eric Schmidt. Warum wir Google fürchten). En *Frankfurter Allgemeine* (FAZ).



- El Comercio. (17 de abril de 2020). La Emergencia Por El Covid-19 Pone En Riesgo 508 000 Empleos. *El Comercio*. (2020). Recuperado de: <https://www.elcomercio.com/actualidad/emergencia-covid19-riesgo-ecuador.html>
- El Comercio. (17 de mayo de 2014). El Día de la Internet se celebra en Ecuador. *El Comercio*. Recuperado de: <https://www.elcomercio.com/tendencias/dia-de-internet-se-celebra.html>.
- Emparanza, A. (2000). *El boicot como acto de competencia desleal contrario a la libre competencia*. Madrid: Civitas Ediciones.
- Espinosa Serrano, J. (2009). *Efectos de la implementación del principio de conservación de la empresa en la Ley de Concurso Preventivo*. (Trabajo para obtención de título). Quito: Universidad San Francisco de Quito.
- Espinoza Espinoza, J. (2014). La responsabilidad civil precontractual. En: González de Cancino, Cortés Moncayo y Navia Arroyo (eds.), *Estudios de derecho civil en memoria de Fernando Hinestrosa*, (pp. 581-639). Bogotá: Colombia, Universidad Externado de Colombia.

- Estancona Pérez, A. (2014). Un derecho al olvido en Europa: a propósito de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de mayo de 2014. *Revista Aranzadi de derecho y nuevas tecnologías*, (36).
- Estrada, F. (2012). *Ronald Coase y los costos de transacción*. Universidad Externado de Colombia. Recuperado de: [https://www.researchgate.net/publication/277205083\\_Ronald\\_Coase\\_y\\_los\\_costos\\_de\\_transaccion](https://www.researchgate.net/publication/277205083_Ronald_Coase_y_los_costos_de_transaccion)
- Fernández Farreres, G. (2012). *Comentario al art. 11 de la LDC, dentro de Monografía de Doctrina, Defensa de la Competencia*. Pamplona: Thomson Reuters Aranzadi .
- Ferreira, R. G. (2013). *Sobre la Constitución: Concepto, composición y mecanismos*. Cuenca: Facultad de Derecho de la Universidad de Cuenca.
- Flores, E. (2018). ¿Por qué es importante el Derecho Concursal? Recuperado de: <https://escueladeposgrado.edu.pe/blog/por-que-es-importante-el-derecho-concursal/>
- García Bresó, J. (1993). *Identidad y cultura en Nicaragua: estudio antropológico de Monimbó*. Universidad de Castilla La Mancha.

- García de Enterría, E. (2016). *Reflexiones sobre la ley y los principios generales del Derecho*. Navarra: Thomson Reuters.
- García de Enterría, E. y Fernández, T. R. (1999). *Curso de Derecho Administrativo*, tomo I. Madrid: Civitas.
- García de Enterría, E. y Fernández, T. R. (2008). *Curso de derecho administrativo*. Bogotá, Colombia: Editorial Temis SA.
- García-Ruiz, J. (1992). De la identidad aceptada a la identidad elegida: el papel de lo religioso en la politización de las identificaciones étnicas en Guatemala. *Estudios Sociológicos*, 10(30), pp. 713-734.
- Garibotto, J. C. (1991). *Teoría general del acto jurídico*. Buenos Aires, Argentina: Depalma.
- Giannini, S. (2020). *El cierre de escuelas debido a la Covid-19 en todo el mundo afectará más a las niñas*. UNESCO. Recuperado de: <https://es.unesco.org/news/cierre-escuelas-debido-covid-19-todo-mundo-afectara-mas-ninas>
- Gobierno Nacional. Decreto Legislativo 560. (2020). De 15 de abril de 2020.

- Goldenberg Serrano, J. L. (2016). Mecanismos de Protección a los Acreedores de una Sociedad de Responsabilidad Limitada Infracapitalizada. Análisis Crítico y Propuesta de Solución. *Revista Chilena de Derecho Privado*, (27), pp. 141-225.
- González, E. (2007). La teoría de los stakeholders. Un puente para el desarrollo práctico de la ética empresarial y de la responsabilidad social corporativa. *Revista Veritas*, II (17), pp. 205-224. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2471547.pdf>
- Gordillo, A. (2016). *Tratado de derecho administrativo y obras selectas*, tomo 4. Buenos Aires. Recuperado de: [https://www.gordillo.com/pdf\\_tomo4/capitulo6.pdf](https://www.gordillo.com/pdf_tomo4/capitulo6.pdf) /[capitulo7.pdf](https://www.gordillo.com/pdf_tomo4/capitulo7.pdf)
- Gray, P. y Riley, G. (2015). *Grown Unschoolers · Profiles of Grown Unschoolers, In Their Own Words*. Recuperado de: <https://grownunschoolers.com/>
- Gual, J. (2011). Cláusulas restrictivas de la responsabilidad un acercamiento a sus principales problemáticas. En Echeverri, A. (Dir.). Gual, J. y Acosta, J. (Coord.). *Responsabilidad Civil y Negocio Jurídico*. Bogotá: Ibáñez.

- Guerrero Zaplana, J. (2014). La sentencia del asunto google: configuración del derecho al olvido realizada por el TJUE. *Revista Aranzadi doctrinal*, (4).
- Harris, M. (1979). *El desarrollo de la teoría antropológica. Historia de las teorías de la cultura*. México: Siglo Veintiuno Editores.
- Henao, J. C. (1998). *El daño. Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés*. Bogotá: Colombia, Universidad Externado de Colombia.
- Heredero Campo, M. (2015). Evolución tecnológica y derecho al olvido digital, desde sus inicios a la actualidad. En J. P. Aparicio y C. A. Batuecas (coords.), *En torno a la privacidad y la protección de datos en la sociedad de la información*. Granada: Ed. Comares.
- Hinestrosa, F. (2015). *Tratado de las obligaciones. II. De las fuentes de las obligaciones, V. I*. Bogotá: Colombia, Universidad Externado de Colombia.
- Hinestrosa, F. (2017). Devenir del derecho de daños. *Revista de Derecho Privado*, (32), pp. 5-26.

- Huapaya, R. (2002). El proyecto de ley de reforma de la Constitución, la constitución económica y la regulación económica como técnica de reversión del estatismo. *Revista Peruana de Derecho Público*, (4), pp. 69-88.
- INDECOPI. (2020). Reporte de Estadísticas Institucionales 2020. Recuperado de: <https://www.indecopi.gob.pe/documents/1902049/3387871/Primer+Trim+2020/d17e1a3b-23d2-a57b-1ec5-888ef5eb5497>
- INEC. (2018). Tecnologías de la Información y comunicación. Encuesta Multipropósito - TIC 2018. Recuperado de: [https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas\\_Sociales/TIC/2018/201812\\_Principales\\_resultados\\_TIC\\_Multiproposito.pdf](https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/TIC/2018/201812_Principales_resultados_TIC_Multiproposito.pdf).
- Institución Nacional de Evaluación Educativa. (2018). *La educación en el Ecuador: Logros alcanzados nuevos desafíos Resultados educativos 2017-2018*. Quito: Institución Nacional de Evaluación Educativa. Recuperado de: [https://www.evaluacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/02/CIE\\_ResultadosEducativos18\\_20190109.pdf](https://www.evaluacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/02/CIE_ResultadosEducativos18_20190109.pdf).

- Institución Nacional de Evaluación Educativa. (2020). *Investigaciones Ser Estudiante - Evaluaciones*. Recuperado de: <http://www.evaluacion.gob.ec/evaluaciones/investigaciones-ser-estudiante/>
- Jaramillo, C., y Robles, P. (2014). La reparación del daño extrapatrimonial a la persona por incumplimiento contractual: la experiencia colombiana. *Revista De Derecho Privado*, (26), pp. 499-527. Recuperado de: <https://revistas.ueexternado.edu.co/index.php/derpri/article/view/3809>
- Jensen, M. (2009). Maximización del valor, teoría de los “stakeholders” y la función objetiva de la empresa. *Aurkilan Spanish annual*, (1), pp. 65-90. Recuperado de: [http://www.aurkilan.org/documentos/11.AURKILAN\\_Spanish\\_Annual\\_09.pdf](http://www.aurkilan.org/documentos/11.AURKILAN_Spanish_Annual_09.pdf)
- Koteich, M. (2012). *La reparación del daño como mecanismo de tutela de la persona. Del daño a la salud a los nuevos daños extrapatrimoniales*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- Laithier, Y.M. (2007). *Étude comparative des sanctions de l'inexécution du contrat*. Paris: LGDJ.
- Larroumet, C. (2004). A propósito de la negación de la responsabilidad contractual en la doctrina francesa reciente. En Pizarro, C. (Edit). *Temas de Responsabilidad Civil*. Santiago: Universidad Diego Portales.

- Le Torneau, P. (2014). De la falsedad del concepto de “responsabilidad contractual”. En: González de Cancino, Cortés Moncayo y Navia Arroyo (eds.), *Estudios de derecho civil en memoria de Fernando Hinestrosa*, (pp. 673-709). Bogotá: Colombia, Universidad Externado de Colombia.
- Le Tourneau, P. (2007). *Droit de la responsabilité et des contrats*. Paris: Dalloz.
- Ledesma Navaez, M. (2008). *Comentarios al Código Procesal Civil*, tomo III. Lima: Gaceta Jurídica.
- León, L. (2006). La responsabilidad por el daño a la confianza en haber celebrado un contrato irregular. *Derecho & Sociedad*, (26), pp. 287-301.
- Lévi-Strauss, C. (1987). *Antropología estructural*. (E. Verón, Trad.) Barcelona: Ediciones Paidós.
- Levitsky, S. y Murillo, M. V. (2010). Variación de la fortaleza institucional. *Revista de sociología*, (24), pp. 31-56. Recuperado de: <https://revistadesociologia.uchile.cl/index.php/RDS/article/view/14399>
- Ley 107. (1990). R. O. 520 del 12 de septiembre de 1990.



Ley 21. (2000). R. O. 116 de 10 de julio del 2000.

Ley de Control de Precios y de Calidad. [Decreto 1774]. R. O. 412 del 31 de agosto de 1977

Libertad y buen gobierno Liberdом. (2018). Índice de fortaleza institucional IFI 2017. [Gráfico 2]. Recuperado de: <https://liberdom.org/wp-content/uploads/2019/10/Indice-de-fortalecimiento-institucional-IFI-2017-Liberdom-2018.pdf>

Llano, A. (2014). Derecho y conciencia en la relación jurídica educativa: de la educación para la ciudadanía y la educación afectivo sexual al homeschooling. *Anuario De Derecho A La Educación*, pp. 139-198.

López Díaz, P. V. (2017). La tutela precontractual y contractual del acreedor en el Código civil chileno: dos sistemas estructuralmente diversos, pero, ¿plenamente coherentes y convergentes? *Revista Chilena de Derecho Privado*, (29), pp. 9-98.

López García, M. (2014). Derecho a la información y derecho al olvido en Internet. *La Ley Unión Europea*, (17).

- López Suárez, D. (2020). El concurso preventivo y la reestructuración de emprendimientos. *LexLatin*. Recuperado de: <https://lexlatin.com/opinion/concurso-preventivo-reestructuracion-emprendimientos>
- Marcos, F. (2015). Contribuciones del análisis económico del derecho de sociedades en España. *Economía industrial*, (398), pp. 31-40. Recuperado de: <https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/398/FRANCISCO%20MARCOS.pdf>
- Marín Vélez, G. A. (2004). La responsabilidad precontractual en Colombia. *Opinión Jurídica*, (5), pp. 57-78.
- Martínez - Cárdenas, B. (2013). *La responsabilité precontractuelle. Étude comparative des régimes colombien et français*. (Tesis de doctorado). Universidad Panthéon-Assas.
- Martínez, C. J. (2006). *Costos de agencia: de las finanzas a la política*. Universidad de Palermo. Recuperado de: [https://www.palermo.edu/economicas/pdf\\_economicas/cbrs/cbrs\\_viejos/UP-CBRS\\_costos\\_agencia\\_politica.pdf](https://www.palermo.edu/economicas/pdf_economicas/cbrs/cbrs_viejos/UP-CBRS_costos_agencia_politica.pdf)

- Martínez, O. (2015). El derecho al olvido en Internet: debates cerrados y cuestiones abiertas tras la STJUE Google vs. AEPD y Mario Costeja. *Revista de Derecho Político*, (93).
- Martínez-Cárdenas, B. y Rocha- Tapias, H. (2016). La transformación del derecho privado en Colombia. *Revista de derecho*, (45), pp. 32-58.
- Mayer-Schönberger, V. y Cukier, K. (2013). *Big Data, la revolución de los datos masivos*, título original: *Big Data. A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think*, (trad. de Antonio Iriarte). Editor digital: Titivillus.
- Meléndez, F. (2005). *Los derechos fundamentales en los estados de excepción según el derecho internacional de los derechos humanos*. Recuperado de: <https://ebookcentral-proquest-com.pucesa.idm.oclc.org>
- Mendez Reátegui, R. (2017). *Essays on Institutions, Coordination and Legal Theory*. Quito: Centro de Publicaciones Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
- Méndez Reátegui, R. (2019). *Law and Economics: Institutional coordination and Legal Theory*. Quito: Centro de Publicaciones Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

- Méndez, R. y Alosilla, R. (2015). Nueva Historia Económica, Instituciones y Nueva Historia Institucional: Una Breve Retrospección. *Revista Laissez-Faire*, (43), pp. 1-13.
- Méndez, R., Coca, D. y Alosilla R. (2016). La eficiencia de la administración: un análisis comparado desde el enfoque neo institucional de los casos peruano y ecuatoriano. *Iustel, Revista General de Derecho Administrativo*, 43.
- Menéndez, A. (1991). *La Competencia Desleal*. Madrid: Civitas S.A.
- Merma Molina, G. (2012). *El Sistema Concursal Peruano: Limitaciones y Potencialidades*. Perú: Universidad Nacional del Callao, Facultad de Ciencias Contables.
- Minero, G. (2017). Presente y futuro de la protección de datos personales. Análisis normativo y jurisprudencial desde una perspectiva nacional y europea. *Anuario jurídico y económico Escorialense*, Real Centro Universitario Escorial-Ma. Cristina.
- Ministerio de Educación. Acuerdo Ministerial 57. (2019). R. O. 65 de 22 de octubre de 2019.
- Ministerio de Educación. Acuerdo Ministerial 067-13-A. (8 de abril de 2013).

Ministerio de Gobierno y Ministerio de Salud Pública. Acuerdo Interministerial 00002-2020. Reglamentación para la aplicación de multas por incumplimiento del toque de queda en el contexto del estado de excepción por calamidad pública declarado en el Decreto Ejecutivo No. 1017 del 16 de marzo del 2020. (2020). En Guayaquil el 25 de marzo de 2020.

Monsalve Caballero, V. (2007). Disertación para una nueva construcción en Colombia de la culpa in contrahendo. *Revista de derecho*, (27), pp. 41-73.

Monsalve Caballero, V. (2012). La responsabilidad precontractual por violación de la obligación de información en la nueva ley de protección al consumidor. *Vniversitas*, (125), pp. 219-255.

Montero, M. (1984). *Ideología, alienación e identidad nacional: una aproximación psicosocial al ser venezolano*. Caracas: Universidad Central de Venezuela.

Morand-Deville, J. (2017). *Derecho Administrativo*. Colombia: Universidad Externado de Colombia.

Moréteau, O. (2000). *Droit anglais des affaires*. Paris: Dalloz.

- Muller, D. (1996). *Constitutional Democracy*. Nueva York: Oxford University Press.
- Munar Cadena, P. O. (2018). Formación del contrato. En: Castro de Cifuentes (Coord.), *Derecho de las obligaciones, con propuestas de modernización*, t. II. 2ª ed., (pp. 1-35). Bogotá: Colombia, Universidad de los Andes y Editorial Temis.
- Namén Vargas, W. (2009). El dilema dicotómico de la responsabilidad contractual y extracontractual. En M. Bernal Fandiño (autora), *Tendencias de la responsabilidad civil en el siglo XXI*. (pp. 429-460). Universidad Javeriana.
- Navas Tapia, O. (2019). *Teoría General del Proceso*. Quito, Ecuador: Corporación de Estudios y Publicaciones.
- Neme Villarreal, M. (2009). Buena fe subjetiva y buena fe objetiva. Equívocos a los que conduce la falta de claridad en la distinción de tales conceptos. *Revista de Derecho Privado*, (17), pp. 45-76.
- North, D. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Nuño, P. (2017). *Coste de oportunidad*. Recuperado de: <https://www.emprendepyme.net/coste-de-oportunidad.html>
- OCDE y Unesco (2003). *Literacy Skills for the World of Tomorrow – Further results from PISA 2000*. Recuperado de: <http://www.oecd.org/education/school/2960581.pdf>
- OECD. (2014). OECD Regulatory Compliance Cost Assessment Guidance. Paris: OECD Publishing. DOI: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264209657-en>
- ONU. (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos.
- Ordóñez Barba, G. y Ortega Villa, G. (2006). La lucha contra la pobreza en el gobierno de Fox: continuidad en la alternancia. En G. Ordóñez Barba, R. Enríquez Rosas, I. Román Morales, & E. Valencia Lomelí, *Alternancia, políticas sociales y desarrollo regional en México* (pp. 159-192). Tijuana: El Colegio de la Frontera Norte.
- OREALC/UNESCO Santiago. (2007). El derecho a una educación de calidad para América Latina y el caribe. *Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 5(3). Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/551/55130502.pdf>

- Oviedo-Albán, J. (2008). Tratos preliminares y responsabilidad precontractual. *Vniversitas*, (115), pp. 83-116.
- Palacio, J. D. (2011). La responsabilidad precontractual ¿se aproxima a la responsabilidad contractual? En: *Responsabilidad civil, derecho de seguros y filosofía del derecho, t. I, Homenaje al Profesor Javier Tamayo Jaramillo*, (pp. 98-99). Bogotá: Colombia, Biblioteca Jurídica Dike.
- Parody Navarro, J. (2011). Sobre La Práctica Del “Homeschooling” En España y La Jurisprudencia Europea. *Revista Europea De Derechos Fundamentales*, (17/1), pp. 299-320.
- Parraguez Ruiz, L. (2015). La responsabilidad precontractual por ruptura de las tratativas preliminares. *Iuris Dictio*, (17), pp. 171-209.
- Patrón, C. (2006). *El perro del hortelano: definiendo el rol empresarial del estado en Latinoamérica*. SELA (Seminario en Latinoamérica de Teoría Constitucional y Política) Papers. Paper 50. Retrieved from: [http://digitalcommons.law.yale.edu/yls\\_sela/50](http://digitalcommons.law.yale.edu/yls_sela/50)
- Pazos Castro, R. (2015). El mal llamado “Derecho al olvido” en la era digital. *Boletín del Ministerio de Justicia*, LXIX (2183), pp. 29-30.



- Pérez Álvarez, C. E., Cuétara López, R., & Alfonzo Pérez, I. R. (2008). Cultura, identidad nacional y geografía. *Varona*, (46), pp. 46-51.
- Pérez Luño, A. (2017). *Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución*, 11° ed. Madrid: Tecnos.
- Pino Emhart, A. (2014). Una aproximación continental al derecho inglés de los contratos. *Revista Chilena de Derecho Privado*, (22), pp. 233-253.
- Ponce Rivera, C. A. (2017). La actividad probatoria como parte del debido procedimiento en los procedimientos administrativos sancionadores. *Revista Lex de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas*. DOI: <http://dx.doi.org/10.21503/lex.v15i20.1448>.
- Presidente Constitucional de la República del Ecuador. Decreto Ejecutivo No. 1017. (2020). En Quito, el 16 de marzo de 2020.
- Presidente de la República de Perú. Reglamento del Decreto Legislativo No. 1511. [Decreto Supremo 102-2020-PCM]. (2020). El Peruano de 04 de agosto de 2020.

- Puente Escobar, A. (2016). *El “derecho al olvido”*. En F. Pérez Bes (coord.), *El derecho de Internet*. Barcelona: Atelier.
- Puente, M. A. (2020). Webinar: Concurso Preventivo – Alternativa de Salvataje Empresarial. [Conferencia virtual]. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=eMMUkAQvgh0&t=2177s>
- Purtova, N. (2014). Default entitlements in personal data in the proposed Regulation: Informational self-determination off the table...and back on again? *Computer Law and Security Review*, 30(1).
- Quintana, E. (2011). Análisis de Impacto Regulatorio en la Regulación Peruana de Servicios Públicos. *Derecho y Sociedad*, (36), pp. 15-29.
- Rallo Lombarte, A. (2014). *El derecho al olvido en Internet. Google versus España*. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
- Redacción Primicias (20 de marzo de 2020). El tiempo para las tareas no debe superar las dos horas, dice Educación. *Primicias*. Recuperado de: <https://www.primicias.ec/noticias/sociedad/coronavirus-deberes-educacion-clases/>

Resolución 0020-2018. (2018). Dictada dentro del juicio laboral 2065-2017 de 4 de enero del 2018.

Restrepo Uribe, C. y Londoño Toro, S. (2015). *La vigencia de la distinción entre la responsabilidad civil contractual y extracontractual: trascendencia de la dualidad, problemas de la unificación y las nuevas tendencias*. (Trabajo de grado). Universidad EAFIT, Medellín, Colombia. Recuperado de [https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/8268/Camila\\_RestrepoUribe\\_Susana\\_Londo%C3%B1oToro\\_2015.pdf?sequence=2&isAllowed=y](https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/8268/Camila_RestrepoUribe_Susana_Londo%C3%B1oToro_2015.pdf?sequence=2&isAllowed=y)

Rieble, S., Viteri, A., Vásquez, M. y Ortiz, E. (2020). *COVID-19 y la gran apuesta del aprendizaje desde casa: ¿funcionará para todos? - Enfoque Educación*. Recuperado de: <https://blogs.iadb.org/educacion/es/aprendizajedesdecasa/>

Rivero, R. y Granda, V. (2017). *Derecho Administrativo*. Ecuador: Corporación Editora Nacional.

Rojas Castañeda, D. (2020). Cinco pasos para acogerse a un proceso de insolvencia en medio de la pandemia. Recuperado de: <https://www.asuntoslegales.com.co/consumidor/cinco-pasos-para-acogerse-a-un-proceso-de-insolvencia-en-medio-de-la-pandemia-3003627>

- Rosales, V., Bitrán, D. e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de México. (1996). *Aspectos de costo-efectividad*. Organización Panamericana de la Salud. Recuperado de: <https://url2.cl/zMcLg>
- Rubén, G. R. (1992). La teoría de la identidad en la antropología: un ejercicio de etnografía del pensamiento moderno. *Antropología y Ciencias Sociales*, (2), pp. 69-80.
- Ruiz Caro, A. (2002). *El proceso de privatización en el Perú durante el período 1991-2002*. Santiago: CEPAL.
- Salgado Ramírez, C. (2014). Breve introducción a la responsabilidad precontractual en la teoría de Rudolf Von Jhering. En: González de Cancino, Cortés Moncayo y Navia Arroyo (eds.), *Estudios de derecho civil en memoria de Fernando Hinestroza*, (pp. 721-758). Bogotá: Colombia, Universidad Externado de Colombia.
- Salgado, E. (2003). Teoría de costos de transacción: una breve reseña. *Cuadernos de Administración*, 16 (26), (p. 61-78). Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/205/20502604.pdf>
- San Martín Neira, L. (2013). Responsabilidad precontractual por ruptura injustificada de negociaciones. *Revista chilena de derecho*, (1), pp. 315-322.

- Sánchez, J. (2015). *Barreras de salida*. Recuperado de: <https://economipedia.com/definiciones/barreras-de-salida.html>
- Santofimio, J. (2017). La actividad de la administración pública y sus principales manifestaciones. En *Compendio de Derecho Administrativo*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- Santos Ballesteros, J. (2006). *Instituciones de responsabilidad civil*, t. I. Bogotá: Colombia, Pontificia Universidad Javeriana.
- Sanz, I., Sainz, J. y Capilla, A. (2020). *Efectos De La Crisis Del Coronavirus*. Madrid: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
- Schmidt, E. (2014). Google's executive chairman says European court of justice ruling went too far in favour of privacy at cost of right to know. En "*The Guardians*".
- Sevilla, E. (2018). *El analfabetismo digital*. Recuperado de: <https://www.inacorpsa.com/analfabetismo-digital/>
- Sifuentes Domenack, H. H. (1998). Algo sobre la nueva Ley de la Empresa: El Levantamiento del Velo Jurídico. *Revista Themis*, (38), (p. 357-371)

- Simón Castellano, P. (2012). *El régimen constitucional del derecho al olvido digital*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Simón Castellano, P. (2014). *El reconocimiento del derecho al olvido digital en España y en la UE*. Madrid: Bosch.
- Stigler, G. (1971). The Theory of Economic Regulation. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, (1), pp. 3-21.
- Stolcke, V. y Wolfson, L. (2000). La “naturaleza” de la nacionalidad. *Desarrollo Económico*, 40(157), pp. 23-43.
- Suárez Jácome, G. y Méndez Reátegui, R. (2020). Barreras Burocráticas: Consideraciones preliminares para una reforma normativa en el Ecuador. En J. Robalino Orellana y D. Robalino Orellana (eds.), *Derecho & Economía: Libre Competencia y Regulación*, pp. 138-166. Quito: Centro de Publicaciones Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
- Sumar, O. & Iníguez, E. (2017). *Economía Constitucional. Las libertades económicas en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional*. Lima: Themis.
- Tamayo Jaramillo, J. (2007). *Tratado de responsabilidad civil*, t. I. Bogotá: Colombia, Legis.

- Tambussi, C. (2015). *Defensa de la Competencia, dentro de Práctica y Estrategia, Derechos del Consumidor, Modelos de Escritos, Doctrina, Jurisprudencia*. Buenos Aires: La Ley, Thomson Reuters.
- Tarziján, J. y Paredes, R. (2012). Barreras a la entrada y estrategias competitivas. *Organización industrial para la estrategia empresarial*. Pearson: Prentice Hall. Recuperado de: [http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2012/org\\_indu/5.pdf](http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2012/org_indu/5.pdf)
- Terán, J. G. (2020). *El derecho administrativo sancionador*. Quito: Webinar Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
- The Heritage Foundation. (2019). *2019 Index of Economic Freedom*. Recuperado de: [http://www.iberglobal.com/files/2019-1/economic\\_freedom\\_index\\_2019.pdf](http://www.iberglobal.com/files/2019-1/economic_freedom_index_2019.pdf)
- Tomás Martínez, G. (2010). Naturaleza de la responsabilidad precontractual (*culpa in contrahendo*) en la armonización jurídica europea. *Revista de derecho*, (1), pp. 187-210.
- Torres Arends, I. (2001). Ciudadanía y cultura jurídica: una aproximación a la identidad jurídica del venezolano. *Politeia*, (27), pp. 91-104.

- Torres, J. J. (2009). *La resistencia civil y la búsqueda de identidades sociales y culturales en las zonas de frontera en medio del conflicto armado colombiano*. Bogotá: Universidad de La Salle.
- Torres, N. (2008). Breve Reseña Histórica De La Evolución y El Desarrollo Del Derecho A La Educación. *Revista Electrónica Educare*, (12), pp. 83-92.
- Troncoso Reigada, A. (2013). Las redes sociales a la luz de la Propuesta de Reglamento General de Protección de Datos Personales. *Revista de Internet, Derecho y Política, Universitat Oberta de Catalunya*, (16).
- Trujillo, Y. (2020). Contenido para estudiantes se transmitirá por radio y televisión desde este lunes 23 de marzo del 2020. *El Comercio*. Recuperado de: <https://www.elcomercio.com/actualidad/educacion-estudiantes-coronavirus-radio-television.html>.
- UNESCO y Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT. (2018). *Las TIC para el cumplimiento de los objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas*. Recuperado de: <https://www.itu.int/es/mediacentre/backgrounders/Pages/icts-to-achieve-the-united-nations-sustainable-development-goals.aspxedu>.



- Valle Segura, P. y Méndez Reátegui, R. (2019). Institutional Framework: Intellectual Property and The Impact on Import and Export Operations in Ecuador. IUS HUMANI, 8, pp. 9-42. DOI: <https://doi.org/10.31207/ih.v8i0.202>
- Valle, J. (2011). Enseñar en casa o en la escuela: La doctrina legal sobre el homeschooling en España. *Perfiles educativos*, 34(138).
- Velasco San Pedro, L. A. (2010). *El derecho europeo de la competencia, dentro de Derecho de la competencia y la propiedad industrial, intelectual y comercial*. Madrid: La Ley, Iberdrola, Asociación del Colegio de Ingenieros del ICAI.
- Velásquez Gómez, H. D. (2010). *Estudio sobre obligaciones*. Bogotá, Colombia: Temis.
- Vidal Perdomo, J. (2010). *Derecho administrativo*, 3ra edición. Bogotá, Colombia: Legis.
- Viney, G. (2011). El porvenir de la distinción entre responsabilidad contractual y extracontractual (Trad. Ximena Raquel Calderón Rojas y Carlos Augusto Ríos Pizarro). *Revista ius et Veritas*, (43), pp. 16-43. (Trabajo original publicado en 2008)

Vistazo. (28 de agosto de 2020). ¿Cuáles son los colegios más caros en Quito? *Vistazo*. Recuperado de: <https://www.vistazo.com/seccion/pais/politica-nacional/cuales-son-los-colegios-mas-caros-en-Quito>.

White, M. J. (1989). The corporate Bankruptcy decision. *Journal of Economic Perspectives*, 3(2), pp. 129-151.

World Economic Forum. (2020). *Economy Profiles*. Social Mobility Report 2020. Recuperado de: [http://reports.weforum.org/social-mobility-report-2020/economy-profiles/?doing\\_wp\\_cron=15594401198.152159929275512692755126953125#eoomy=EC](http://reports.weforum.org/social-mobility-report-2020/economy-profiles/?doing_wp_cron=15594401198.152159929275512692755126953125#eoomy=EC)

Zona Económica. (2019). *Costo de oportunidad*. Recuperado de: <https://www.zonaeconomica.com/costo-de-oportunidad>

Zúñiga, M. (2002). *¿Por qué existen las personas jurídicas? Una respuesta desde la teoría económica de la empresa*. *Actualidad Jurídica*, tomo 108. Lima: Gaceta Jurídica, pp. 47-56. Recuperado de: <https://app.box.com/s/mthlvvd60rdz1naoel6qev374zlbkni2>